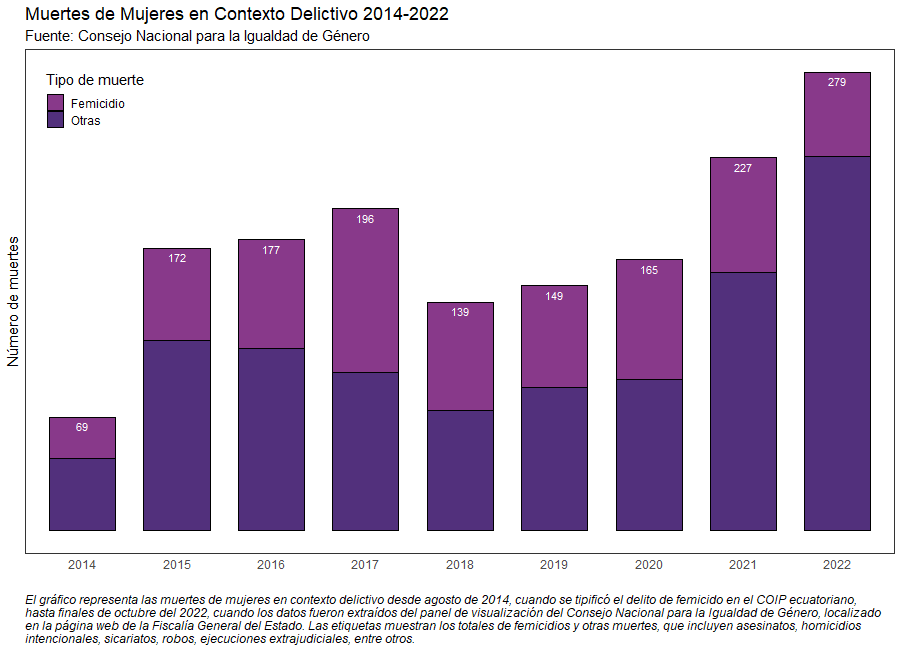
Tres problemas para el análisis cuantitativo de los femicidios en Ecuador

Alejandra Marchán y Daniel Sánchez

2022-11-20



En Ecuador existe un recuento de muertes violentas de mujeres desde agosto 2014, año en el que se tipificó el delito de femicidio en el COIP[[1]](#footnote-23) hasta finales de 2022, momento en el que los autores recuperaron los datos del [reporte](https://www.fiscalia.gob.ec/analitica-muertes-de-mujeres-en-contexto-delictivo/) presentado periódicamente por el Gobierno Nacional, mediante la Comisión Especial de Estadística de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia[[2]](#footnote-25). Las cifras separan a las muertes de mujeres en dos categorías diferentes. Una es el femicidio que se define “la persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, de muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género”[[3]](#footnote-26).

La minoría de muertes violentas de mujeres durante el período se clasifican como femicidios, quizás debido a la dificultad de la categorización de la misma. La definición del delito en el COIP sitúa al femicidio como un crimen de odio contra la mujer *por el hecho de serlo*, sin embargo, al ser dificultoso conocer los motivos del criminal, los agentes de la ley se han centrado en aspectos conductuales para poder sentenciar a los femicidas[1]. La segunda categoría del reporte oficial, contiene muertes violentas que no se sentenciaron como femicidio, incluyendo aquellas muertes de mujeres por “homicidios intencionales”[[4]](#footnote-27), asesinato, sicariato, robo, ejecución extrajudicial, entre otros. Bajo esta aclaración, sería posible pensar que dada la dificultad de sentenciar un femicidio, buena parte de los *femicidios reales* podría estar dentro de esta cifra, pero no se conoce en que proporción.

Se puede observar que las muertes violentas aumentaron significativamente en el 2022: respecto al 2021, el 2022 presenta alrededor de un 20% más del total de muertes violentas para el año anterior. Este preocupante hallazgo abre el camino a varias preguntas necesarias para caracterizar este incremento, preguntas difíciles de responder sobre la manera en la que se manejan los datos sobre violencia de género en el Ecuador. ¿Existió realmente un aumento en los delitos de odio hacia la mujer? ¿Tiene algo que ver la ola de violencia[3] relacionada al narcotráfico con este aumento?, pero más que nada, ¿de dónde provienen los datos y se puede asegurar su veracidad?

Si bien algunas de estas preguntas se las pudo responder parcialmente, las conclusiones que pudimos obtener solo dan paso a más preguntas sobre la manera en la que el Ecuador maneja la información sobre delitos violentos, especialmente de femicidios, y cómo se la utiliza (si ha alguna vez se lo ha hecho) para generar política pública.

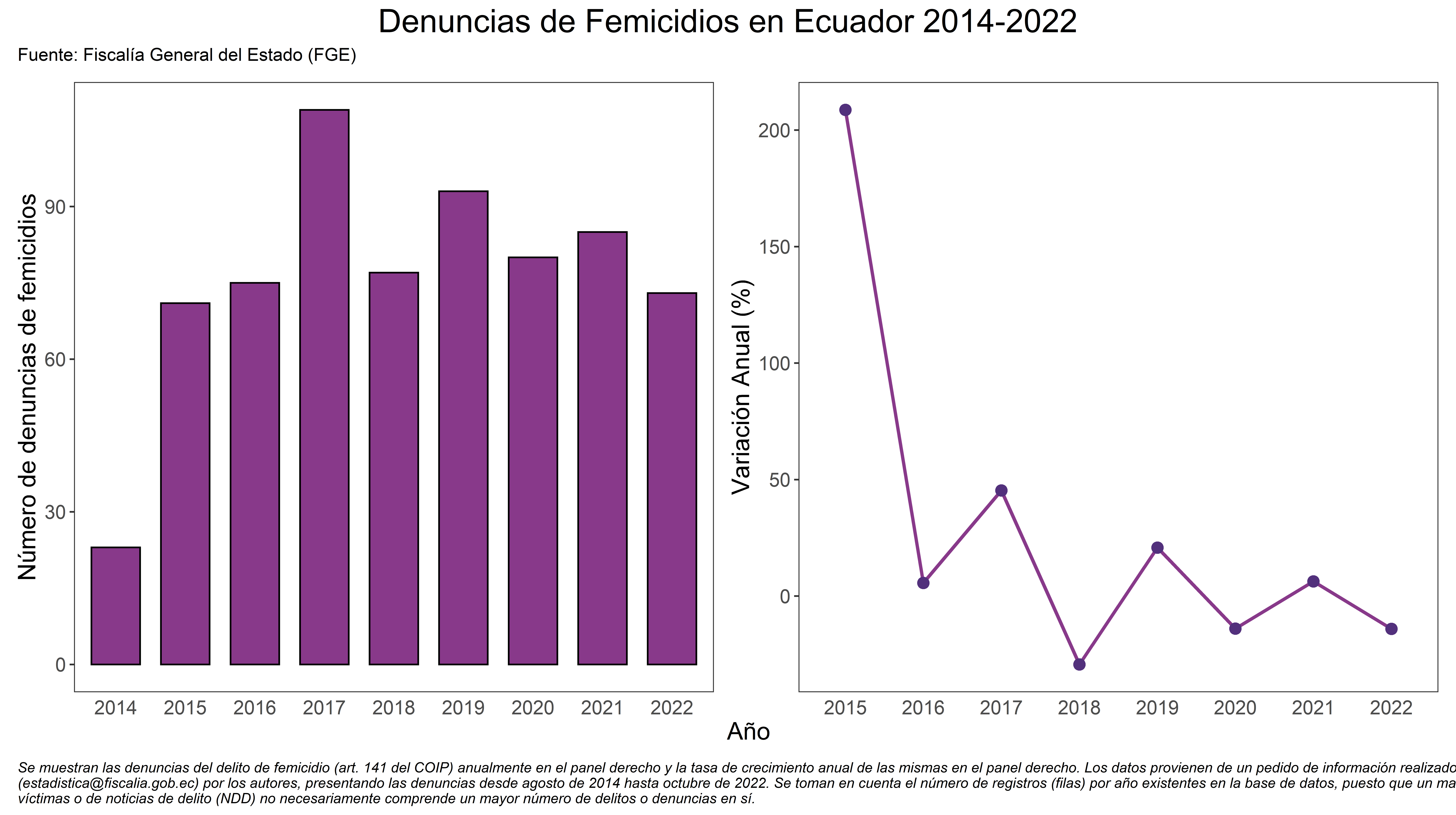
# El Problema Estadístico y Organizacional

La posibilidad de que el 2022 sea el año más violento para las mujeres del Ecuador definitivamente amerita un análisis más profundo, sin embargo, el reporte oficial no brinda acceso directo a los datos ni a un documento exhaustivo sobre su metodología. Lo poco que se logró conocer es que el aumento en muertes de mujeres en contexto delictivo se debió a muertes que *no* son femicidios, pero debido al problema que mencionamos anteriormente, esto no dice mucho. En esta etapa, podría sugerirse que la ola de violencia reciente del Ecuador podría tener algo que ver con el aumento de las muertes de mujeres en contexto delictivo, pero no se puede asegurar si esto tiene que ver con delitos de odio hacia la mujer.

El reporte oficial nos redirecciona al [sitio web de estadísticas](https://www.fiscalia.gob.ec/estadisticas-fge/) de la Fiscalía General del Estado (FGE) para más información. Desafortunadamente, la FGE tampoco provee acceso público a sus bases de datos, pero mediante un pedido de información[[5]](#footnote-29) se logro determinar otros problemas que surgen en el manejo de datos del sector público:

* La base de datos de la FGE es a nivel de denuncias, por lo que no existe una manera de calcular las estadísticas presentadas en sus visualizaciones
* La base no proporciona para diferenciación de víctimas por género, debido a que *en algunos casos las víctimas no son identificadas o son desconocidas y por tanto la variable tiene subregistro*[[6]](#footnote-30)*.*
* Se sugirió que la base de datos enviada por la FGE no es suficiente para realizar los cálculos presentados en el reporte oficial, debido a que los datos están esparcidos a lo largo de diferentes instituciones públicas[[7]](#footnote-31), de las cuales no todas tienen formas de proporcionar información al público como la FGE.

A continuación, se grafican los datos de denuncias que nos proporcionó la FGE:



Si bien el movimiento de las denuncias contra femicidios se mueve en la misma tendencia que los femicidios provistos por el reporte oficial y el Ministerio de Gobierno, no es posible llegar a conclusiones más profundas que a las que hemos llegado anteriormente.

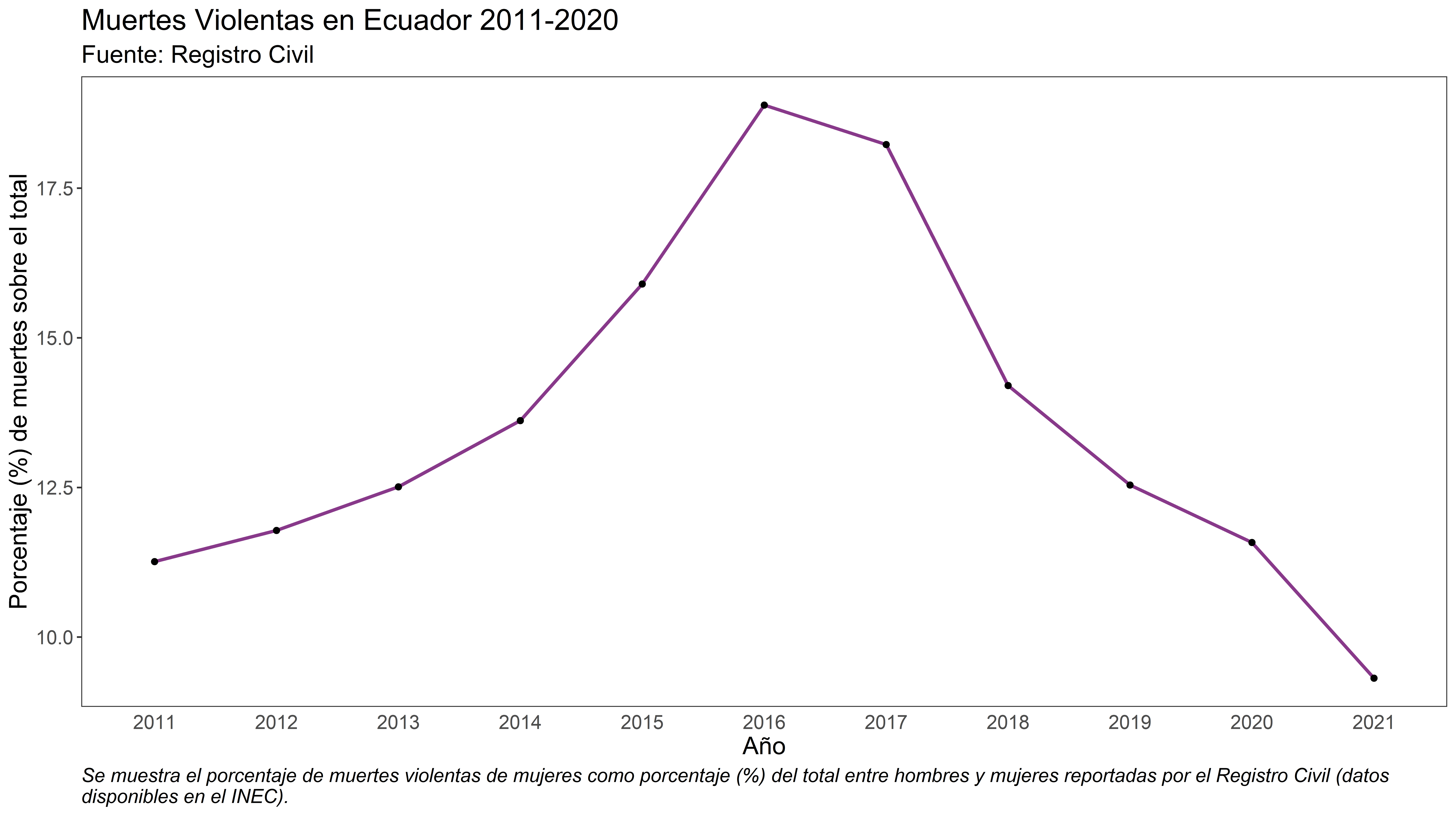
Como se esperaría con un delito tipificado recientemente, el número de denuncias aumentó de forma inmediata, estabilizándose gradualmente. Se tiene una tasa de crecimiento considerable después de la introducción del delito, lo que probablemente corresponde a denuncias de femicidios que *no* sucedieron durante ese mismo año. Esto genera dos problemas diferentes para nuestros propósitos:

1. El número de denuncias dentro de un año puede ser de crímenes cometidos en años anteriores
2. Existe un gran número de crímenes que jamas se llegan a denunciar.

Al no poder hacer una relación directa entre denuncias y víctimas, fue natural explorar otras instituciones públicas. Una de ellas fue el Ministerio de Gobierno, donde se pudo determinar que el reporte oficial coincide con los [datos de femicidios del Ministerio de Gobierno](http://cifras.ministeriodegobierno.gob.ec/comisioncifras/inicio.php). Sin embargo, esta institución dejó de diferenciar delitos por género desde 2014, por lo que no es posible continuar el análisis del aumento de muertes de mujeres en 2022.

Otra fuente disponible en el sector público fue la base de datos de defunciones generales del Registro Civil, disponible en el sitio web del [INEC](https://www.ecuadorencifras.gob.ec/defunciones-generales/#:~:text=En%20el%20a%C3%B1o%202021%20se,de%20la%20publicaci%C3%B3n%20es%20anual.). De aquí se pudo obtener el número de muertes violentas, en donde sí es posible realizar una diferenciación a nivel de género. Sin embargo, no existe una categorización de muertes por delito, al no ser el Registro Civil una institución enfocada en lo legal.

Lo mejor que se puede lograr es una comparación de muertes violentas entre hombres y mujeres, en donde la cifra de muertes violentas de mujeres es comparable al total de muertes de mujeres en contexto delictivo que se puede ver en el primer gráfico. A continuación, graficamos el porcentaje de muertes violentas de mujeres como porcentaje del total de muertes violentas (hombres + mujeres). Se puede observar que las muertes de mujeres llegaron a su pico más alto durante el 2017 y desde ese año han caído considerablemente; de hecho se encuentran en su punto más bajo en 2022. Esto coincide con los datos que se observan en el reporte oficial.



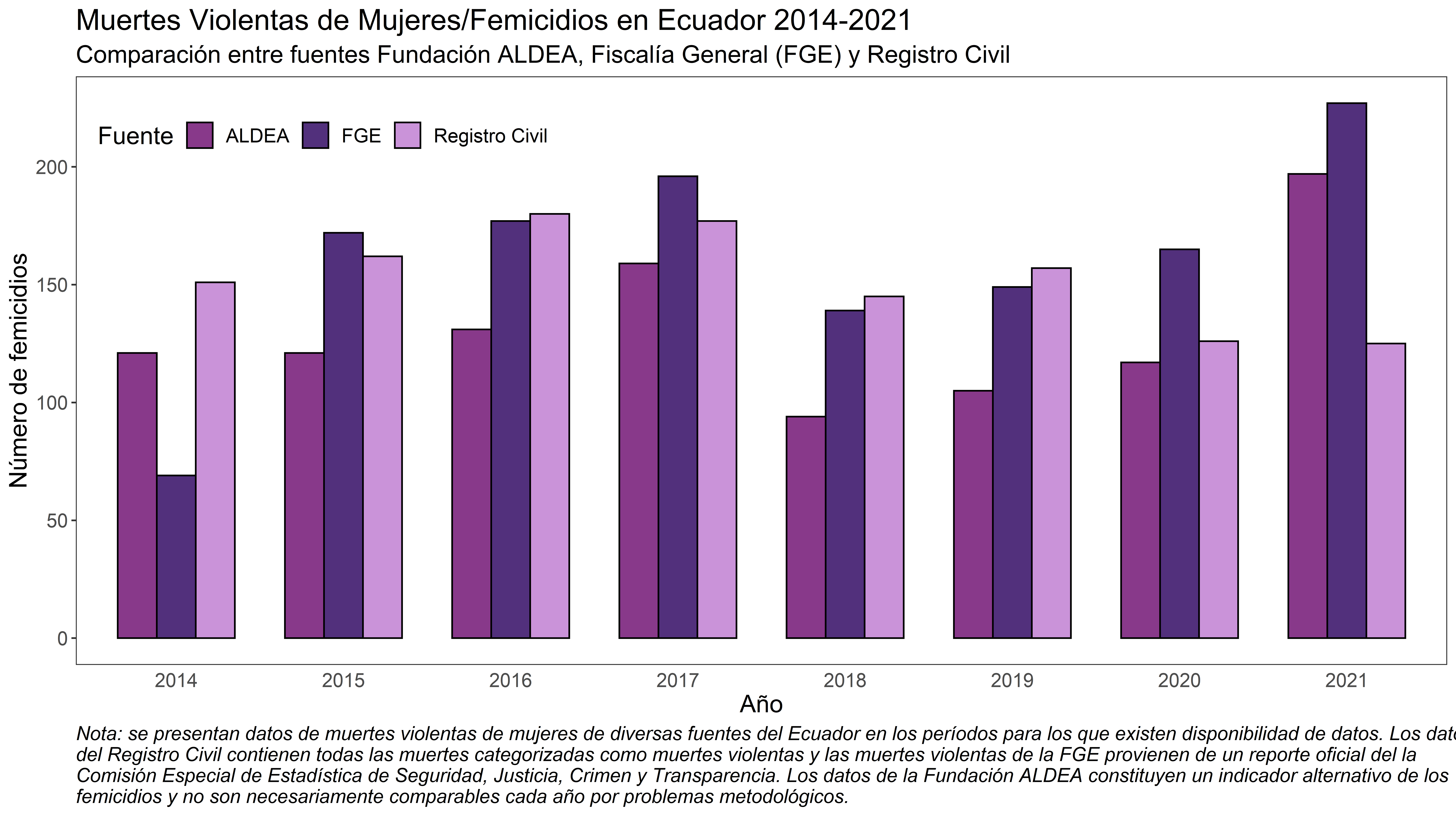
# El Problema de los Datos de la Sociedad Civil

Con el objetivo de tener información de una fuente no manejada por el Estado, tomamos en cuenta los datos recopilados por la Alianza Feminista para el mapeo de *femi(ni)cidios*[[8]](#footnote-41) en Ecuador, un grupo de organizaciones sociales ecuatorianas, que, entre sus objetivos, planifica proponer un indicador alternativo para los femicidios en el país. La Alianza es apoyada por la Iniciativa Spotlight de las Naciones Unidas[5], enfocada en el empoderamiento global de las mujeres.

Las [cifras](http://www.fundacionaldea.org/mapas) han sido reportadas principalmente por la Fundación Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (ALDEA), mediante un [reporte interactivo](http://80.241.217.8/mapas_estadisticos/femi_pro/#) que presenta y describe los datos de forma general.[6] realizan una revisión sistemática de estos datos. En cuanto a metodología, se detalla que los datos se recopilan en concordancia con “criterios de la normativa nacional e internacional, las variables definidas a partir del Protocolo latinoamericano y ecuatoriano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género” y los métodos de la [Red Latinoamericana contra la violencia de Género/MundoSur](https://mundosur.org/mlf/), una asociación civil con sede en Francia y Argentina enfocada en proyectos de género y derechos humanos.

Esta última organización se ha enfocado en generar una sistematización del monitoreo y visibilización de feminicidios en América Latina desde la pandemia del COVID-19, en donde se determina que la manera de contabilizar los feminicidios está sujeta a cambios en cada país, puesto que para construir las bases de datos de MundoSur, la organización ¨respetó el criterio utilizado por cada fuente/país para la caracterización del femicidio/feminicidio”[7] (p. 8). Si bien se menciona en la página web de MundoSur que desde 2021 se creó una co-metodología de contabilización de femicidios[8], no existen documentos metodólogicos que la describan.

El análisis de[6] menciona que los datos de ALDEA son consecuentes con el [Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de la muerte violenta de mujeres por razones de género, femicidio/feminicidio](https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2014/8/modelo-de-protocolo-latinoamericano#:~:text=El%20Modelo%20de%20Protocolo%20latinoamericano,la%20violencia%20contra%20las%20mujeres.)[[9]](#footnote-46), que ALDEA habria adoptado desde 2017[6]. Particularmente,[6] señalan que, entre los datos de femicidios recopilados por ALDEA, se consideran asesinatos de mujeres en contextos de narcotráfico (ej. la pareja de un narcotraficante). Esto representa un problema para comparar esta fuente con los femicidios reportados por el gobierno, puesto que los casos contra femicidas suelen construirse en casos de relaciones sentimentales tornadas violentas, y no en casos de delincuencia organizada. Esto hace que necesariamente el indicador de ALDEA sea siempre superior al indicador del reporte oficial del gobierno. En el gráfico siguiente comparamos los datos de ALDEA con las muertes violentas (totales) del reporte oficial (abreviado como FGE) y con los datos del Registro Civil.



Existe, adicionalmente, un problema adicional con el indicador de ALDEA y se debe al hecho de que en el año 2021 se empezaron a incluir los asesinatos de mujeres por sicariato a manera de femicidio[6], lo que no es consecuente con la tipificación de femicidio según la legislación ecuatoriana. El considerable aumento de 2020 a 2021 es artificial por esta misma razón, puesto a que antes del 2021 ALDEA no había tomado en cuenta sicariatos en sus cifras. Por esto, no se puede esperar que el indicador de ALDEA sea comparable al femicidio tipificado, por lo que la comparación del gráfico anterior es la adecuada. En este caso, el indicador de ALDEA subestima las muertes violentas de mujeres, sin embargo, debido a que el indicador es inestable a través de los años, no se puede asegurar la comparabilidad año a año de esta cifra.

Nos contactamos con la fundación ALDEA para solicitar acceso directo a sus datos e investigar su considerable aumento de los femicidios, pero lastimosamente nuestra solicitud no fue aprobada por la organización[[10]](#footnote-50). Esto dificulta la tarea de analizar el importante aumento de femicidios en el 2022, en donde del 1 de enero hasta el 31 de mayo se habrían cometido alrededor del 60% de femicidios que se cometieron en el 2021[9]. Sin embargo, debido a la inclusión de los sicariatos y muertes en contexto de delincuencia organizada en este indicador, se podría argumentar que los femicidios han aumentado debido al aumento generalizado de la violencia en el Ecuador de los últimos dos años, tal y cómo nos permiten ver los datos del Gobierno Nacional.

# El Problema de Rendición de Cuentas

El presente análisis de los datos disponibles sobre las muertes violentas de mujeres nos permiten llegar a las siguientes conclusiones:

* Tanto en 2017 como en 2022 han existido picos de muertes violentas de mujeres en el Ecuador, medidas por el indicador de femicidios oficial del Gobierno Nacional.
* No existe una forma clara de investigar a que se deben los movimientos de muertes violentas de mujeres debido a la falta de apertura de los datos de las numerosas instituciones públicas que los reportan.
* Buena parte del aumento de las muertes violentas de mujeres (total) en 2022 se debe a un aumento de las muertes violentas que **no** se categorizaron como femicidio, es decir, muertes como sicariatos, homicidios, asesinatos, entre otros delitos tipificados en el COIP.
* La FGE ofrece una base de datos de denuncias de femicidios y otros delitos, pero no permite realizar un análisis adecuado de víctimas y victimarios, por lo que se desconoce como las instituciones públicas calculan los indicadores presentados en los reportes que se presentan al público.
* Las organizaciones civiles han denunciado la falta de seriedad en la presentación de datos de violencia de género del estado ecuatoriano, sin embargo, aún no ha aparecido una iniciativa clara para solucionar este problema; un indicador alternativo al oficial fue analizado, pero no es posible sacar mayores conclusiones debido a una falta de precisión metodológica y apertura de datos.
* No es posible determinar si es que el 2022 es definitivamente un año particularmente violento hacia las mujeres o hacia todos los ecuatorianos en general: buena parte del análisis sugiere que es el aumento sostenido de la violencia de los últimos dos años lo que parece estar correlacionado con el aumento de muertes de mujeres, pero no podemos estar seguros sin un mejor acceso a los datos.

La falta de seriedad en la publicación de datos y en el mantenimiento de bases de datos abiertas evidencian un problema grave: el problema de rendición de cuentas, en donde las instituciones estatales muestran poco o ningún incentivo de demostrar al público lo que se investiga y lo de que se pretende hacer justicia. La sociedad civil lleva algunos pasos por delante, pero debemos caminar hacia el acceso abierto de datos si se pretende realmente llegar a un ambiente de libre intercambio de información para formular una mejor política pública.

La *mediocridad cuantitativa* del Estado ecuatoriano no es más que una consecuencia de la gigantesca dificultad que existe en navegar el coloso estatal que existido desde tiempos inmemorables, por lo que no se puede culpar a un gobierno u otro de su existencia[[11]](#footnote-52), sino más bien empezar a preguntarse de cómo solucionar el problema. Algunas de las maneras en las que podríamos mejorar el intercambio de datos son:

* Fomentar la elaboración de documentos metodológicos extensos y claros para poder justificar la validez de los datos presentados. Esto asegura la transparencia de lo presentado y ahorra tiempo al usuario de los datos, quien probablemente no tiene la misma experiencia estadística y sectorial que quienes elaboran los reportes de datos.
* Implementar buenas prácticas en el mantenimiento de bases de datos a lo largo del tiempo. Un problema que se volvió evidente durante nuestro análisis fue la extensa limpieza que se requirió para utilizar los datos del Registro Civil presentados por el INEC. Principios básicos como mantener constante el nombre de una misma variable a lo largo de los años, deberíancumplirse siempre en una institución como el INEC.
* En los casos donde la privacidad y la factibilidad económica lo permitan, fomentar el uso de bases de datos abiertas al público. Sirve de muy poco tener visualizaciones atractivas si no se pueden obtener las bases de datos que las generan para poder continuar el análisis.
* Una integración institucional adecuada del sector público que sea visible para los usuarios. La necesidad de navegar a través de diferentes ministerios, secretarias y consejos para conseguir una simple explicación es tediosa e infactible al largo plazo. El [Banco de Datos Abiertos](https://www.datosabiertos.gob.ec/) es un intento de esta integración, pero aun requiere mucho trabajo.

Implementar estas prácticas en el sector publico y sociedad civil significarían un importante paso hacia un sistema fiable y abierto de datos para el Ecuador. Sin un sistema que funcione así, no existirán mecanismos de rendición de cuentas en donde las instituciones públicas encargadas de mantener la paz y/o perseguir la justicia justifiquen su razón de existir y donde los tomadores de decisiones puedan crear política basada en información científica.

1. Físcalía General del Estado. (n.d.). *Fiscalía General del Estado | “Tipificar el femicidio es un gran paso de la legislación ecuatoriana”, fiscal Tania Moreno*. <https://www.fiscalia.gob.ec/tipificar-el-femicidio-es-un-gran-paso-de-la-legislacion-ecuatoriana-fiscal-tania-moreno/>

2. Consejo Nacional de Igualdad de Género. (2022). *Analítica muertes de mujeres en contexto delictivo*. <https://www.fiscalia.gob.ec/analitica-muertes-de-mujeres-en-contexto-delictivo/>

3. *Homicidios, motines carcelarios y estado de excepción: ¿por qué hay una ola de violencia en Ecuador?* (2021). <https://cnnespanol.cnn.com/2021/10/20/violencia-estado-excepcion-ecuador-orix/>

4. Panamá, G.-L. E. de. (n.d.). *Femicidio o feminicidio, ¿cuál es el término correcto?* <https://www.laestrella.com.pa/nacional/191124/femicidio-feminicidio-termino-correcto>

5. *Desarrollo de herramientas y estudios sobre femicidio en Ecuador*. (n.d.). <http://www.fundacionaldea.org/noticias-aldea/desarrolloherramienta>

6. Zambrano, G. C., & Guerra Garcés, G. (2022). *Femicidios en Ecuador: Realidades ocultas, datos olvidados e invisibilizados* (p. 78). <https://nube.fundacionaldea.org/index.php/s/QqmLd25Ex596g36>

7. MundoSur. (2020). *Mapa Lationamericano de Feminicidios: Marco Teórico* (p. 15). <https://mundosur.org/wp-content/uploads/2021/09/Mapa-Latinoamericano-de-Femicidios.-MT.pdf>

8. MundoSur. (n.d.). *¿Quiénes somos? MUNDOSUR*. <https://mundosur.org/sobre-mundosur/>

9. Trujillo, Y. (2022). *Alianza Mapeo: En lo que va del 2022 ya se ha producido el 60*. <https://www.elcomercio.com/actualidad/alianza-mapeo-en-lo-que-va-del-2022-ya-se-ha-producido-el-60-de-los-femicidios-del-2021.html>

10. Adoum, J. E. (2000). *Ecuador: Señas particulares* (6th ed., Vol. 1). Eskeletra Editorial.

1. Código Orgánico Integral Penal, el cuerpo de ley que regula el poder punitivo del estado ecuatoriano [@códigoo]. [↑](#footnote-ref-23)
2. Esta comisión constituye a varias diferentes instituciones gubernamentales, pero el reporte en cuestión está colgado en la página web de la Fiscalía General del Estado. En adelante, nos referimos a este esfuerzo como simplemente <<reporte oficial>>. [↑](#footnote-ref-25)
3. COIP, art. 141. Recuperado de la base metodológica del reporte oficial[1] (párr. 5). [↑](#footnote-ref-26)
4. Según el reporte del Gobierno, se considera un homicidio intencional a “la muerte ilícita causada a una persona con la intención de causarle la muerte o lesiones graves”[2] [↑](#footnote-ref-27)
5. Los autores realizamos un pedido de información al correo electrónico proporcionado por la FGE, estadistica@fiscalia.gob.com, para los delitos de Femicidio (Art. 141), Homicidio (Art. 144), Asesinato (Art. 140), Sicariato (Art. 143) y Violación (Art. 171). [↑](#footnote-ref-29)
6. Esta es la nota que se incluye en la base de datos original de la FGE, disponible en el repositorio de GitHub de este artículo. [↑](#footnote-ref-30)
7. Los analistas de la FGE mencionaron que *se debe observar que la Fiscalía dispone de información de gestión procesal de la justicia. El tema de sentencias corresponde a la Judicatura. Es más, para determinar propiamente al sujeto como víctima o victimario se debe considerar las sentencias.* Esto lleva a entender que la información que la FGE está dispuesta a proporcionar no es suficiente para generar las visualizaciones que ellos presentan (y de acuerdo a sus documentos, que también elaboran). [↑](#footnote-ref-31)
8. En general, el término feminicidio es diferente al femicidio debido a que el primero abarca un sentido político en contra del gobierno de turno por la falta del mismo ante el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, es decir, el feminicidio acarrea el concepto de la impunidad que un Estado desatento genera[4]. La Fundación ALDEA, quien reporta las cifras de esta iniciativa menciona “[el] término feminicidio […] alude a la responsabilidad estatal para el cometimiento de este delito”. [↑](#footnote-ref-41)
9. Este documento, publicado en 2014, dió paso a la investigación penal del delito de femicidio, lo que habría permitido al estado ecuatoriano tipificar el mismo en agosto del mismo año. [↑](#footnote-ref-46)
10. Un responsable de la organización citó que los datos no se suelen revelar **nunca** a externos debido a preocupaciones de seguridad. [↑](#footnote-ref-50)
11. Véase[10]. [↑](#footnote-ref-52)